

673-cas-2007.

SALA DE LO PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; San Salvador, a las once horas y doce minutos del día dieciocho de diciembre de dos mil nueve.

El anterior recurso de casación ha sido interpuesto por el Licenciado Carlos Antonio Figueroa, en su calidad de Agente Auxiliar del Fiscal General de la República, contra auto de Sobreseimiento Definitivo dictado por el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, a las diez horas del día veintitrés de octubre de dos mil siete, en el proceso penal instruido contra el imputado **JOSÉ ARNULFO ARDÓN MIRANDA**, por el delito de **ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA**, Art. 218 Pn., en perjuicio patrimonial de los señores María Teresa Molina Orellana, Juan José Arsenio Molina Orellana y Petrona del Carmen Molina de Panameño.

El recurrente invoca tres motivos; el primero, relativo a la inobservancia de los Arts. 226, 227 y 228 Pr. Pn.; por considerar que los jueces de instancia declararon erróneamente extinguida la acción penal y como consecuencia pronunciaron auto de Sobreseimiento Definitivo a favor del imputado. Como segundo motivo denuncia la errónea aplicación de los Arts. 7, 15 y 34 Pr. Pn., dado que a su criterio no ha existido violación al principio de doble persecución, en razón que no se está persiguiendo al acusado dos veces en la vía penal, y como tercer y último defecto invoca la Falta de Fundamentación de la sentencia señalando la inobservancia de los Arts. 130 y 362 No. 4 Pr. Pn., Dichos motivos únicamente se relacionan en el presente considerando, pues su desarrollo se hará con posterioridad por haber cumplido el recurrente con las formalidades exigidas para la interposición, previstas en los Arts. 407, 422 y 423 Pr. Pn., lo que permite admitirlo y proceder a pronunciar sentencia, de conformidad con lo prescrito en el Art. 427 Pr.Pn..

I) Que mediante auto de Sobreseimiento Definitivo relacionado en el preámbulo de la presente resolución, se resolvió: "...Este Tribunal por **UNANIMIDAD DECLARA EXTINGUIDA LA ACCIÓN PENAL EN CONSECUENCIA, SOBRESEERE DEFINITIVAMENTE**, el cual se dictará con las formalidades del artículo 309 Pr. Pn., al imputado señor **JOSÉ ARNULFO ARDÓN MIRANDA**, de cincuenta y dos años de edad, Salvadoreño, comerciante, casado, originario de San José Guayabal, nació el veintinueve de diciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro, residente en Primera Avenida Norte número cuatro, Barrio El Centro, Aguilares, San Salvador. Hijo de Leandro Ardón y Evangelina Miranda de Ardón; por el delito de **ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA**, previsto y sancionado en el

artículo 218 del Código Penal, en perjuicio patrimonial de MARÍA TERESA MOLINA ORELLANA, JUAN JOSÉ ARSENIO MOLINA ORELLANA Y PETRONA DEL CARMEN MOLINA DE PANAMENÑO...".

**II)** Contra el anterior pronunciamiento el Licenciado Carlos Antonio Figueroa, en su calidad de Agente Auxiliar del Fiscal General de la República, interpuso recurso de casación invocando como motivos los siguientes: "...a) La inobservancia de los Arts. 226, 227 y 228 del Código Procesal Penal.---Según fundamenta el tribunal A-quo, en su fallo interlocutorio de carácter definitivo, dictado en la misma acta de Vista Pública Colegiada, pronunciada a las diez horas del día veintitrés de octubre del corriente año, el citado tribunal es del criterio que la acción penal invocada por la fiscalía ha prescrito, puesto que si la denuncia fue realizada en el año dos mil, los jueces de forma pragmática consideraron que la fiscalía tenía como plazo máximo para impetrar su acción procesal hasta el dos mil cinco; olvidándose con ello que por la naturaleza de este tipo de delito, valga decir, la Administración Fraudulenta, puede perdurar en el tiempo, verbigracia: En lo que conocemos como delito continuado o como en el caso en particular, en donde según lo plasmado en la parte final de la teoría fáctica del requerimiento fiscal, consta que los hechos no han cesado en su ejecución; todo lo cual le fue vedado incorporar, por parte del tribunal Sentenciador, durante el procedimiento seguido para instalar la Vista Pública, al no permitirse que desfilara la prueba testimonial y con ello no permitiéndose inmediar, tal prueba testimonial que hubiese permitido llegar a un juicio de valor acertado sobre el caso a los jueces y no como sucedió, que éstos de forma apresurada emitieron fallo, en el sentido de advertir una prescripción que verdaderamente jamás ha existido. Así mismo advierte que la representación Fiscal, ha controvertido el Principio de Única Persecución Penal, establecido en el Art. 7 Pn., aduciendo éstos que el imputado, ya había sido condenado civilmente y que conforme a los Arts. 586 y 587 del Código de Procedimientos Civiles; las víctimas debieron ejercer la acción respectiva conforme los procedimientos civiles, porque a criterio de los jueces a-quo ellos no pueden convertirse en recaudadores de deudas, y contravenir así el Art. 27 de la Constitución de la República, que prohíbe la prisión por deuda; perdiendo nuevamente de vista los juzgadores que si bien es cierto la representación fiscal, había señalado una sentencia definitiva pronunciada por el Juzgado de lo Civil de San Vicente, de un Juicio Sumario de Rendición de Cuentas y Examen de Cuentas, dicha sentencia, constituía nada mas, una muestra del mal manejo de las actividades laborales del administrador, en la administración de la Lotificación "El Rosario" objeto de esta

controversia, puesto que tal sentencia de Examen y Rendición de Cuentas, comprendía nada mas por un espacio temporal de un año.."; "..b) Errónea aplicación de los Arts. 15, 7 y 34 del Código Procesal Penal.....Es de la opinión de la parte recurrente, que los jueces sentenciadores, aplicaron erróneamente el Art. 7 Pr. Pn., al absolver al imputado, argumentando que la incorporación de la sentencia definitiva pronunciada en el Juicio Sumario de Rendición de Cuentas, que se verificó durante el período comprendido entre el mes de octubre de dos mil tres a noviembre de dos mil cuatro, generaba un "NEBIS IN IDEM", lo anterior, no es compartido por la Representación Fiscal, en tanto que, si bien es cierto, dicha sentencia debe dársele trámite conforme a los Arts. 586 y 587 del Código de Procedimientos Civiles, para su ejecución, también es cierto que, según lo manifestado por las mismas víctimas tal sentencia, esto es, de Rendición de Cuentas, no ha sido ejecutada o dicho en términos sencillos, el imputado del caso sub júdice, no ha cubierto tal deuda con respecto a las víctimas mencionadas en el preámbulo de la presente, por otro lado no se está persiguiendo dos veces por la vía penal sino únicamente en el presente caso. En opinión de la Representación Fiscal no se vulneró el Consagrado Principio de la Doble Persecución.."; ""..Falta de Fundamentación de la Sentencia, Art. 362 No. 4 en relación al Art. 130 Pr. Pn.---Los actos y resoluciones proveídas por órgano Jurisdiccional, según el Art. 130 Pr. Pn., deben hacerse con la Fundamentación que exige el precitado artículo de la Ley Adjetiva Penal, pues es obligación en este caso, para el tribunal de Sentencia, que emitiera un fallo bajo pena de nulidad, sean éstas sentencias definitivas, autos o providencias que lo ameriten, pues así lo preestablece el numeral 4 del Art. 362 del Código Procesal Penal.---En opinión de la Representación Fiscal, los Jueces A-quo, no motivaron adecuadamente los motivos de hecho y derecho, que los llevaron a considerar que había error procedimental, en cuanto a la incorporación de prueba ofertada por la Representación Fiscal y mucho menos al resolver sobre la prescripción de la acción invocada..."".

**III)** Al contestar el escrito de casación interpuesto por la contraparte, el Licenciado René Mauricio Chiquillo Cuéllar, en su calidad de Defensor Particular del imputado José Arnulfo Ardón Miranda indicó: "..desde todo punto de vista es improcedente ya que no cumple las reglas generales que la ley establece en los Artículos 406 y 407 del Código Procesal Penal, en cuanto a la impugnabilidad objetiva y subjetiva, ya que al revisar el recurso interpuesto se puede colegir que no existe fundamento al respecto, por otra parte, al referirse al agravio que les causa la resolución impugnada, únicamente hacen alusión a los intereses de la sociedad y al debido proceso, lo cual no es fundamento para poder atacar la resolución a través del recurso de casación

contemplado en los Arts. 421 al 430 todos del Código Procesal Penal.."" , " ..Por otra parte, esta defensa técnica comparte en toda y cada una de sus partes la resolución dictada por el Honorable Tribunal A-quo, a las diez horas del día veintitrés de octubre del presente año, ya que en el presente caso conforme lo establecido en el Art. 34 Pr. Pn., la Acción Penal ya había prescrito, puesto que basta revisar el proceso para advertir tal situación puesto que la denuncia fue interpuesta el día trece de octubre del año dos mil, fecha desde la cual la Fiscalía General de la República, siendo el garante de la legalidad y el detentor del monopolio de la acción penal conforme lo establece el Art. 193 numerales dos, tres y cuatro de la Constitución de la República debió ejercitarla conforme la ley, es decir que debió presentar su requerimiento fiscal antes que prescribiera el plazo, que en el presente caso el delito de Administración Fraudulenta de acuerdo a lo establecido en el Art. 218 Pn., la pena oscila entre tres a cinco años, es por tal razón que en el presente caso por negligencia del Fiscal asignado al presente caso la acción penal le prescribió el trece de octubre del año dos mil cinco, motivo por el cual el Tribunal A-quo conforme a lo establecido en el Art. 308 numeral cuarto, en relación con el Art. 31 numeral cuarto ambos del Código Procesal Penal, sobreseyó definitivamente al señor José Arnulfo Ardón Miranda y declaró nulidad absoluta del proceso conforme a lo que establece el Art. 224 Pr. Pn., ya que en el presente caso se ha violentado el Principio de Legalidad conforme a los Arts. 1, 2, y 12 todos del Código Penal .."".

#### **IV) CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL CASACIONAL:**

Con relación al primer motivo invocado por el impugnante, y al remitirnos al contenido del auto en recurso; se advierte, que el sentenciador fincó su decisión en la prescripción de la acción penal al considerar que ya había transcurrido el plazo máximo fijado por el Art. 34 No. 1 Pr. Pn., dado que la denuncia fue interpuesta por la ofendida a la Fiscalía General de la República el día trece de octubre del año dos mil y el Requerimiento se presentó al Juzgado de Paz respectivo el día dieciséis de abril de dos mil siete, en tanto que para el delito de Administración Fraudulenta por el que se acusó al imputado, el ente fiscal tenía como plazo máximo el año dos mil cinco, prescribiéndole de tal forma la acción penal.

De la fundamentación planteada por el Licenciado Carlos Antonio Figueroa, se destaca el hecho que los jueces de instancia soslayaron que por la naturaleza del delito, éste puede perdurar en el tiempo y que de conformidad a la teoría fáctica del requerimiento fiscal, Acusación y Auto de Apertura a Juicio, consta que los mismos no han cesado en su ejecución, todo lo cual le fue

vedado incorporar, en virtud de que el día y hora señalados para la realización de la vista pública, ésta no se instaló, imposibilitándose la incorporación de los elementos probatorios ofertados, pronunciándose en su defecto auto de Sobreseimiento Definitivo a favor del imputado, sin intermediación de prueba, es decir, sin ilustrarse suficientemente sobre la comisión del hecho en el tiempo, a partir de los elementos probatorios ofertados para el descubrimiento de la Verdad Real.

Con relación a este punto, este Tribunal verifica que en efecto no se instaló la Vista Pública y como consecuencia lógica no existió incorporación de prueba documental, pericial, ni testimonial que en su oportunidad fuera ofrecida y admitida para el juicio, con la que se podría haber establecido la existencia del último acto de ejecución, a partir de lo que el tribunal de mérito sabría si el delito es permanente o no, pudiendo fundamentar con argumentos ciertos la existencia o no de la prescripción penal, inobservándose de tal forma el debido proceso, ya que en el caso concreto los jueces de sentencia, no debieron dictar auto de sobreseimiento, sino como se ha dicho desarrollar la vista pública convocada, a efecto de permitir introducción al juicio de los elementos probatorios ofertados y admitidos por las partes en el momento procesal oportuno y luego fundamentar su decisión en sentencia definitiva resolviendo lo que a derecho corresponda.

En consecuencia, la Sala es del criterio que si bien es cierto, y de conformidad con la doctrina que sustenta el momento procesal que tiene el sentenciador de pronunciar de manera excepcionalísima auto de sobreseimiento definitivo, en el caso de autos no estamos en presencia de alguna de dichas excepciones, a pesar que la prescripción es una causal extintiva de la acción penal, esta afirmación se sustenta en las siguientes razones: 1º) Se advierte que el tribunal de juicio había convocado a las partes para el desarrollo de la vista pública; 2º) De conformidad al planteamiento fáctico dado por el fiscal en la acusación, se desprenden elementos encaminados a indicar que se está en presencia de hechos constitutivos de una infracción penal que habilitan a estimar una prolongación del delito en el tiempo por continuidad; 3º) La base fáctica ya mencionada debía ser comprobada o no establecida, pero para ello era necesario tomar en cuenta un aspecto de valor esencial, cual es el último acto de comisión delictiva, lo que en éste caso no se hizo y 4º) No se permitió por la paralización procesal, el desfile de prueba cuyo objeto es el descubrimiento de la verdad real, lo que hubiese podido ilustrar a los sentenciadores para adoptar "debidamente motivada" la decisión que fundamenta la presente resolución, ya sea manteniéndola o adoptando una diversa, aspecto que se encuentra ausente en el caso en estudio, pues el A-quo se limitó a emitir un pronunciamiento sin valorar aspectos probatorios tendentes al establecimiento

de las circunstancias, tiempo y modo de comisión, lo que priva de sustento su decisión por las razones antes señaladas.

En virtud de lo expuesto, esta Sala considera que el A-quo se excedió en su competencia funcional dictando una resolución que no correspondía, ya que el sobreseimiento definitivo, es un supuesto que procede solo de forma excepcional en la etapa del juicio y que la oportunidad procesal será en la audiencia inicial o como acto conclusivo de la instrucción, apartándose el tribunal de juicio, al dictar la interlocutoria objeto de impugnación, de las formas legales establecidas por el legislador, es decir que éste debió desarrollar a plenitud la vista pública y dictar la sentencia respectiva, a fin de definir el conflicto jurídico objeto del proceso, condenando o absolviendo, según corresponda, de conformidad al Art. 53 Pr. Pn.,

Con base en lo antes expuesto el Tribunal casacional concluye que es procedente acceder a la pretensión del recurrente y en consecuencia casar la interlocutoria, en consecuencia se deberá realizar la vista pública, por un tribunal distinto al que emitió el sobreseimiento que se anula en virtud de esta resolución, de conformidad al Art. 427 Inc. 3 Pr. Pn.. Por lo dicho, y en vista de que el presente motivo es procedente y su consecuencia es la nulidad total del auto recurrido se torna innecesario entrar al estudio y resolución del resto de motivos alegados por el peticionario.

**POR TANTO:** De conformidad con las razones apuntadas, disposiciones legales citadas y Arts. 50 Inc. 2 No. 1, 357, 421, 422 y 427 Pr.Pn., en nombre de la República de El Salvador, esta Sala **RESUELVE:**

**I) DECLÁRASE HA LUGAR A CASAR** el Sobreseimiento Definitivo pronunciado por el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, a las diez horas del día veintitrés de octubre de dos mil siete, por los motivos invocados.

**II)** Devuélvase el proceso al Tribunal de origen, para que éste a su vez lo envíe al Tribunal Tercero de Sentencia de ésta ciudad, a efecto de realizar una nueva vista pública.

**NOTIFÍQUESE.**

**R. M. FORTIN H.-----M. TREJO.-----GUZMAN U. D. C.-----**  
**PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN.-----**  
**RUBRICADAS.-----ILEGIBLE.**